

LOS CONFLICTOS DE AMERICA CENTRAL, 1978-1996

JUAN AVILES FARRE
Catedrático de Historia Contemporánea
UNED

A lo largo de los años ochenta Nicaragua, El Salvador y Guatemala, tres países centroamericanos habitualmente olvidados por la prensa internacional, aparecieron con cierta frecuencia en los titulares de los periódicos. La primera gran noticia fue el triunfo sandinista en Nicaragua (1979), que parecía presagiar una nueva era revolucionaria en América Latina, como veinte años antes había ocurrido con el triunfo de Castro en Cuba. Luego se sucedieron los titulares acerca de los conflictos que asolaban El Salvador, Guatemala y la propia Nicaragua y que a menudo se traducían en hechos atroces, como el asesinato de monseñor Romero, arzobispo de San Salvador (1980), o las matanzas de campesinos mayas en Guatemala, cuyo eco llegó a la opinión mundial a través de la denuncia de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992. En medio de aquellos conflictos sangrientos se inició en los tres países la transición a la democracia, a partir de la elecciones celebradas en 1982 en El Salvador y en 1984 en Guatemala y Nicaragua, pero cabía pensar que sólo representaban una fachada bajo la que se ocultaba el poder de las armas.

En 1986 una reunión de presidentes centroamericanos, celebrada en la localidad guatemalteca de Esquipulas, dio inicio a un proceso de paz que inicialmente se enfrentó a grandes dificultades. Luego vino la gran sorpresa de 1990, cuando el gobierno sandinista de Nicaragua cedió el poder a la oposición tras su derrota en unas elecciones. Poco después, las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses depusieron definitivamente las armas. El proceso tardó más en dar sus frutos en los otros dos países en conflicto, pero también en ellos las negociaciones entre el gobierno y los movimientos guerrilleros, favo-

recidas por la mediación internacional, condujeron a acuerdos de paz, en El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996.

El estudio de estos conflictos presenta por tanto un interés doble. En primer lugar merece la pena preguntarse cómo fuerzas enfrentadas en unos conflictos de una extremada ferocidad lograron llegar a unos acuerdos de paz que, favorecidos por la intervención de países amigos, entre ellos España, se hallan hoy plenamente consolidados. El propósito de este artículo es plantear una posible respuesta a ambas cuestiones.

LOS FACTORES DEL CONFLICTO

Gran parte de las guerras civiles que han tenido lugar en el mundo durante el siglo XX pueden encuadrarse en dos tipos: las de origen social y las de origen nacional o étnico. El segundo tipo, del que son ejemplos obvios los conflictos surgidos en la antigua Yugoslavia o en Ruanda, es el más común en nuestros días; pero no debe olvidarse que a lo largo del siglo ha sido más frecuente el primero, es decir, el de aquellos conflictos civiles en que se enfrentan bandos que tienen concepciones opuestas del orden social y que por tanto cuentan con apoyos sociales diversos, pues obviamente los privilegiados tienen motivos para defender el orden establecido y los desfavorecidos lo tienen para apoyar los intentos de cambiarlo. Esto se presta a una interpretación muy simple, la de que las guerras de este tipo son el resultado directo de la desigualdad social y la miseria de las masas. Ocurre sin embargo que la desigualdad y la miseria han sido rasgos comunes de las sociedades civilizadas durante milenios y sin embargo las guerras civiles surgidas de la aspiración a un cambio del orden social han sido muy poco frecuentes en la historia, salvo en el último siglo y medio.

Esto probablemente se debe a que su génesis resulta indispensable un factor ideológico, es decir, la existencia de un proyecto de revolución social con suficiente atractivo como para provocar una amplia movilización de masas y a que tales proyectos revolucionarios sólo surgieron a partir del siglo XVIII y, sobre todo, del XIX. A su vez este segundo factor se presta a otra interpretación muy simple y muy

popular en medios conservadores, según la cual este tipo de conflictos no surgen de la miseria de las masas, sino de su manipulación por revolucionarios profesionales al servicio del comunismo internacional. Lo cual nos conduce a un tercer elemento que hay que tener en cuenta: la dimensión internacional de tales conflictos, que en el período de 1945 a 1989 se enmarcaron en el contexto de la guerra fría, por lo que fue frecuente el apoyo de la Unión Soviética a los revolucionarios y de los Estados Unidos a los defensores del orden establecido. Por último, la intervención estadounidense ha dado también lugar a interpretaciones contrapuestas, pues mientras unos la han defendido como una actuación en defensa de la democracia y frente a la amenaza comunista, otros la han denunciado como una manifestación de imperialismo destinada a proteger a unos regímenes tiránicos y corruptos pero favorables a los intereses de la gran potencia americana.

La carga polémica del tema es pues enorme y no resulta fácil llevar a cabo en pocas páginas un análisis ponderado de los distintos factores en juego. Como punto de partida puede afirmarse sin duda que los conflictos centroamericanos fueron del tipo que hemos denominado social, que amplios sectores de la población de los tres países vivían en condiciones de miseria, que sus movimientos revolucionarios eran de orientación leninista y tenían fuertes conexiones con la Cuba castrista y que la intervención de los Estados Unidos jugó un papel muy importante en los casos de Nicaragua y El Salvador. Y para profundizar en el análisis conviene centrar la atención en cuatro aspectos: a) la existencia de un proceso previo de desarrollo económico que no evitó la agudización de las tensiones sociales; b) la estrechez o inexistencia de cauces legales para la lucha a favor de un cambio político y social; c) el auge de una ideología revolucionaria de inspiración básicamente leninista, pero cuya difusión entre las masas se vio favorecida por una conexión cristiana, a través de la denominada teología de la liberalización; y d) los motivos y principios rectores de la intervención de los Estados Unidos.

a) Desarrollo económico y tensión social.

Como puede observarse en la Tabla 1, los tres países que nos interesan experimentaron en los años sesenta y setenta un importante crecimiento que sólo se interrumpió con el inicio del conflicto. Paralelamente la esperanza media de vida aumentó de forma perceptible, según se observa en la Tabla 2. Es decir, que el conflicto se gestó en un momento en que la prosperidad era mayor que en cualquier período anterior, y ello no es tan sorprendente como pudiera parecer. El desarrollo no siempre favorece la estabilidad política, sino que al contrario la conflictividad a menudo se eleva en sus primeras fases, cuando al tiempo que persiste la miseria se producen fuertes cambios sociales que modifican las formas de vida tradicionales, mientras que el aumento de la alfabetización y el crecimiento urbano proporcionan condiciones favorables para la difusión de nuevas ideas, incluidas las revolucionarias.

Tabla 1

Producto Interior Bruto por habitante
Dólares de 1970. Según la paridad de poder adquisitivo

	El Salvador	Guatemala	Nicaragua
1960	329	335	282
1970	406	416	424
1978	486	507	441
1980	399	519	314
1984	307	440	283

Fuente: V. Bulmer-Thomas (1987), *The political economy of Central America since 1920*. Cambridge University Press.

Tabla 2

Esperanza media de vida al nacer
Años

	El Salvador	Guatemala	Nicaragua
1965-1970	55	50	51
1975-1980	62	56	54
1985-1990	62	62	62

Fuente: IICA (1991): *Centroamérica en cifras*. San José, Costa Rica.

b) Los estrechos cauces de participación política.

Las aspiraciones al cambio social o político que surgieron en estos países, al compás del desarrollo económico, la urbanización y la alfabetización, se enfrentaron a una carencia de cauces democráticos para expresarse. No faltaban ciertamente algunos elementos que podían dar una apariencia democrática a sus regímenes, pues se celebraban elecciones, eran legales algunos partidos de la oposición y existía cierta libertad de prensa, pero en realidad sólo los candidatos apoyados por el poder tenían posibilidades electorales, las libertades políticas y sindicales eran precarias y, lo que es más grave, no existía una garantía efectiva de los derechos humanos más elementales, de tal manera que los ciudadanos se hallaban indefensos frente a los abusos del poder. Bajo una exigua fachada democrática, los regímenes de Guatemala y El Salvador eran prácticamente dictaduras militares, mientras que Nicaragua se hallaba, desde los años treinta, bajo la dictadura de una dinastía familiar, la de los Somoza. Ello suponía que las corrientes democráticas reformistas, de orientación democristiana, socialdemócrata o incluso comunista (ya que los partidos comunistas de la región defendían la actuación política en el marco de la legalidad), carecían de posibilidades reales de acceder al gobierno.

c) El auge de la ideología revolucionaria.

La existencia de unas condiciones sociales que favorecían las aspiraciones al cambio y la ausencia de unos cauces democráticos efectivos favorecieron la amplia aceptación de la alternativa revolucionaria en medios sindicales, universitarios e incluso eclesiásticos. Existía en muchas personas la convicción de que no sólo era difícilísimo que pudiera llegar al poder por vías legales un gobierno comprometido con un proyecto de reforma social, sino que en el caso de que así fuera se vería expuesto a la hostilidad de los Estados Unidos, que no repararían en medios para derribarlo. Dos precedentes históricos reforzaban esa convicción: el derrocamiento de Arbenz en Guatemala (1954) y el de Allende

en Chile (1973). Y a su vez el triunfo de la revolución cubana (1959) pareció demostrar que la vía de las armas ofrecía una posibilidad de victoria. De hecho el ejemplo y el estímulo directo de Cuba fueron decisivos para la proliferación de organizaciones guerrilleras que en los años sesenta y setenta se produjo en numerosos países latinoamericanos, entre ellos Nicaragua (desde 1958), Guatemala (desde 1960) y El Salvador (desde 1970).

Al igual que Castro en Cuba, las guerrillas centroamericanas adoptaron una ideología fundamentalmente leninista, con la singularidad, sin embargo, de que bastantes de sus integrantes y simpatizantes llegaron a la opción revolucionaria a través de una radicalización de su compromiso cristiano. Ello se debió al especial impacto que, debido a sus circunstancias sociales y políticas, tuvo en muchos países latinoamericanos el mensaje de renovación católica lanzado por el Concilio Vaticano II (1962-1965). De ahí surgió la teología de la liberación, con su opción preferencial por los pobres, que en su expresión más radical, ciertamente minoritaria, llegaba a justificar la violencia revolucionaria.

d) La intervención de Estados Unidos.

La ausencia de cauces democráticos favoreció la opción revolucionaria, pero ésta a su vez contribuyó a la radicalización represiva de los regímenes centroamericanos en un círculo vicioso que condujo a la guerra civil. En tales circunstancias la intervención de los Estados Unidos, potencia hegemónica en el área, era previsible y no carecía de precedentes históricos, pues en el marco de los conflictos civiles de Nicaragua hubo tropas norteamericanas en este país de 1912 a 1932.

Pero la intervención norteamericana en los años ochenta debe situarse sobre todo en el contexto de la guerra fría y de la existencia de una posición soviética avanzada en Cuba, aunque también en el de la dramática experiencia de Vietnam, que llevó en adelante a Washington a mostrarse muy reticente en el empleo directo de sus tropas. Bajo la presidencia de Reagan (1981-1989), la política norteamericana se orientó a frenar la expansión soviética, que en años anteriores se había apuntado importantes bazas en Asia y

Africa, y escogió como campo de acción prioritario América Central, un escenario en el que la Unión Soviética difícilmente podía rivalizar con Estados Unidos. Así es que Reagan se dispuso a prestar todo el apoyo necesario, salvo el envío de tropas, para que el gobierno de El Salvador venciera la insurgencia revolucionaria y para que los contrarrevolucionarios nicaragüenses derribaran al gobierno sandinista de Managua. No reanudó en cambio la ayuda militar al régimen guatemalteco que su predecesor Carter había suspendido debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas en este país, en el que la guerrilla nunca tuvo posibilidades reales de victoria. Por su parte la Unión Soviética mantuvo siempre un perfil bajo en América Central y nunca otorgó a la Nicaragua sandinista una ayuda comparable a la que prestó a la Cuba castrotrista.

EL DESARROLLO DEL CONFLICTO

La guerra civil que condujo al triunfo sandinista en Nicaragua fue bastante corta, pues se desarrolló fundamentalmente desde mediados de 1978 hasta mediados de 1979, es decir, durante la presidencia de Carter, aunque las primeras acciones armadas del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) se remontaban a 1962. Luego, de 1981 a 1988, el régimen sandinista hubo de hacer frente a una insurgencia contrarrevolucionaria, la llamada "Contra". En cuanto a Guatemala y El Salvador, la fase más aguda del conflicto se desarrolló entre 1979 y 1984, aunque la acción de las guerrillas había comenzado bastantes años antes y continuó, con menor intensidad, hasta 1992 en El Salvador y 1996 en Guatemala.

En cada uno de los tres países actuaron diversas organizaciones armadas revolucionarias con proyectos políticos diferenciados, pues incluso los sandinistas se dividieron en tres tendencias a mediados de los años setenta, pero finalmente todas se integraron bajo un mando nacional unificado. Las tres tendencias del FSLN formaron una dirección conjunta en 1979; las distintas guerrillas de El Salvador (entre ellas la creada por el propio Partido Comunista, que optó por las armas en 1979) se unieron en 1980 en el Frente Fara-

bundo Martí de Liberación Nacional (FMLN); y en 1982 lo hicieron las de Guatemala, que formaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

En términos generales y de manera especialmente nítida en El Salvador las fuerzas revolucionarias tendieron a adoptar una estructura tripartita, integrada por un partido político, una guerrilla que constituía su brazo armado, y un conjunto de organizaciones de masas a través de las cuales se realizaba la labor de agitación política. En condiciones de guerra civil, sin embargo, esta estructura fue difícil de mantener, porque las organizaciones de masas fueron descabezadas y diezmadas por la represión, mientras que partido y ejército guerrillero tendían a confundirse.

Aunque el estudio del desarrollo concreto del conflicto en cada país exigiría más espacio del que aquí disponemos, cabe al menos hacer algunas observaciones.

a) La revolución sandinista.

La caída de Anastasio Somoza II, hijo del fundador de la dinastía, respondió al caso relativamente frecuente de un dictador arbitrario y corrupto que termina enajenándose el apoyo de casi todos los sectores sociales significativos. Si no fue derribado por un golpe militar, como le ocurrió a algún dictador salvadoreño o guatemalteco, fue probablemente porque la Guardia Nacional tenía desde sus orígenes en los años treinta una vinculación con la dinastía Somoza insólita en un ejército. Cuando a comienzos de 1978 empezó a surgir una amplia movilización contra su régimen, en la que junto a sectores desfavorecidos participaron también sectores de las clases altas y medias, la política del presidente norteamericano Carter, que hacía bandera de la defensa de los derechos humanos, se orientó a favorecer su abandono del poder a través de un diálogo con la oposición moderada.

Pero si esta política de Washington debilitó a Somoza, no logró forzar su dimisión y facilitó por tanto el mismo resultado que pretendía evitar, es decir, el triunfo del FSLN, una fuerza revolucionaria abiertamente hostil a los Estados Unidos. Frente al descrédito de Somoza y la impotencia de la oposición moderada, los sandinistas mostraron una

gran habilidad en la combinación de la lucha armada, la movilización de las masas populares y el entendimiento con otras fuerzas políticas. En la Junta que tras la huida de Somoza asumió el poder en Managua en julio de 1979 eran hegemónicos los sandinistas, que contaban con el poder militar, pero estaban también representados sectores de la oposición moderada.

b) El inicio de la guerra civil en El Salvador.

La tesis de que para evitar una revolución es mejor desembarazarse preventivamente de los gobernantes impopulares y abordar una reforma social que satisfaga al menos parcialmente las aspiraciones de las masas no pudo ser llevada a la práctica en Nicaragua, pero sí lo fue en El Salvador. En octubre de 1979, tres meses después de la entrada de los sandinistas en Managua, un golpe militar derribaba en El Salvador al general Romero, vencedor de las fraudulentas elecciones de 1977. Se formó entonces una Junta integrada por militares y por políticos de la oposición moderada y se abrió así la posibilidad de una transición pacífica a la democracia, que muy pronto se frustró. Las organizaciones revolucionarias, estimuladas por el reciente triunfo sandinista, optaron por jugar la carta de la insurrección, mientras que la acción represiva de las fuerzas de seguridad y de los "escuadrones de la muerte" a ellas vinculados se caracterizó por la violencia y la ilegalidad. En tales circunstancias la política reformista de la Junta, presidida desde 1980 por el democristiano Napoleón Duarte, no pudo impedir el estallido de la guerra civil.

La gran ofensiva que el FMLN lanzó en enero de 1981 no logró sin embargo la conquista del poder y sus guerrillas hubieron de refugiarse en áreas rurales. Poco después el gobierno de Reagan inició una masiva ayuda económica y militar a El Salvador. Al tiempo que estimulaba la continuación de las reformas sociales y la transición a la democracia, la intervención norteamericana favoreció la creación de unidades militares de élite entrenadas en tácticas de contrainsurgencia. Lo que no mejoró fue el respeto a los derechos humanos. De hecho fue una de las nuevas unidades entrenadas por los norteameri-

canos, el batallón Atacatl, la que en diciembre de 1991 cometió la peor atrocidad de toda la guerra: la matanza de la población entera del caserío de El Mozote, es decir, más de doscientas personas, entre los que se hallaban, de acuerdo con la escrupulosa investigación forense realizada por un equipo internacional en 1992, al menos 131 niños menores de doce años.

c) El inicio de la guerra civil en Guatemala.

Los guerrilleros revolucionarios lograron tomar el poder en Nicaragua y estuvieron más o menos cerca de conseguirlo en El Salvador, pero nunca llegaron a representar una amenaza semejante para el orden establecido en Guatemala. Y sin embargo fue en este último país donde más sangriento resultó el conflicto, debido a la adopción de unas tácticas de contrainsurgencia destinadas a eliminar o amedrantar mediante el terror masivo a aquellos sectores de la población que pudieran apoyar a la guerrilla. De acuerdo con el informe hecho público en 1999 por la Comisión de Esclarecimiento Histórico establecida en base a los acuerdos de paz y bajo los auspicios de la ONU, el 91 por 100 de las violaciones de los derechos humanos en Guatemala de las que hay constancia entre 1978 y 1984 son atribuibles a agentes del Estado, fundamentalmente militares, y un 3 por 100 a la guerrilla.

El hecho de que las víctimas de las matanzas masivas fueran en su mayoría poblaciones del grupo maya, que representa alrededor de la mitad de la población total guatemalteca, ha conducido a dicha Comisión a acusar a los responsables de las mismas de genocidio, de acuerdo con la definición que del mismo dio la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y ratificada por Guatemala en 1949. Este último aspecto del conflicto en Guatemala, el país con mayor porcentaje de población amerindia de América Central, no debe sin embargo llevar a la conclusión de que se trataba de una guerra de origen étnico. Los dirigentes de las organizaciones guerrilleras eran en su mayo-

ría de origen europeo o mestizo, su objetivo era la revolución social y decían actuar en nombre de todas las masas oprimidas, independientemente de su adscripción étnica.

Por otra parte, aunque la responsabilidad directa de la gran mayoría de las matanzas masivas sea atribuible a agentes del Estado, las tácticas de la guerrilla, que incluían la ocupación temporal de aldeas en las que trataban de ganarse el apoyo de sus habitantes realizaban a menudo asesinatos selectivos para luego retirarse, suponían dejar a la población de las mismas indefensa frente a eventuales represalias.

La época más violenta del conflicto guatemalteco coincidió con las presidencias de los generales Romero Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1984). Este último, que había desplazado al anterior mediante un golpe de Estado, fue a su vez derribado por otro golpe militar. Para entonces la guerrilla, aunque subsistía en algunas áreas, estaba muy debilitada.

d) La contrarrevolución armada en Nicaragua.

La caracterización del régimen sandinista constituye una cuestión polémica, pero cabe realizar algunas afirmaciones claras al respecto. En primer lugar es obvio que el objetivo de los sandinistas no era el establecimiento de una democracia pluralista y que muy pronto la capacidad de actuación de los opositores a su régimen, entre quienes se encontraban sectores que habían participado en la lucha contra Somoza, se vio notablemente coartada. Es muy posible que la Nicaragua sandinista se encaminara hacia un futuro de economía estatalizada y dictadura de partido único, pero el hecho es que, a diferencia de lo ocurrido en Cuba, nunca se llegó a ello, pues siempre se mantuvieron en cierta medida la economía mixta y el pluralismo político. Y hay que añadir que, aunque se produjeron violaciones graves de los derechos humanos, los sandinistas no cometieron atrocidades comparables a las que dieron en Guatemala y El Salvador.

Desde el punto de vista del gobierno Reagan, sin embargo, lo esencial era el papel

EL CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA

que jugaba la Nicaragua sandinista en el tablero de la guerra fría, como una segunda Cuba que podía estimular la revolución en los países vecinos y de hecho prestaba apoyo a la guerrilla salvadoreña. En último término, lo más peligroso desde el punto de vista de Washington era que el conflicto armado pudiera extenderse a México, pero la política de Reagan no fue de mera contención de nuevos avances revolucionarios en América Central, sino que se orientó al derrocamiento del régimen sandinista mediante el recurso a distintos medios, incluido el entrenamiento y financiación de una fuerza armada antisandinista, la llamada "Contra", que operó de 1981 a 1988. La importante ayuda norteamericana, que pasó por muchos altibajos porque el Congreso de los Estados Unidos se mostró a menudo reticente ante una operación destinada a derribar a un gobierno extranjero, y la seguridad que le proporcionaban sus bases en Honduras, no convirtieron sin embargo a la "Contra" en una fuerza de combate eficaz. El fracaso de su gran ofensiva de 1987, en la que utilizó lanzamisiles portátiles tierra-aire para hacer frente a la decena de helicópteros arillados de fabricación soviética con los que contaban los sandinistas, le llevó a un acuerdo de cese el fuego en 1998. Sin embargo, su acción contribuyó a debilitar a los sandinistas, que hubieron de detraer recursos de otros fines para financiar el gasto militar. Como puede observarse en la Tabla 3, Nicaragua llegó a tener, a pesar de la exigüidad de su población, las Fuerzas Armadas más numerosas de toda América Central.

Tabla 3

Las Fuerzas Armadas en América Central
Población (millones). Personal militar (miles)

	1979-80	1988-89	1979-80	1989-90
El Salvador	4,6	5,9	6,9	56,0
Guatemala	6,8	8,6	17,9	42,0
Honduras	3,6	4,8	11,3	18,7
Nicaragua	2,5	3,5	8,3	77,0

Fuente: IISS, The Military Balance.

Los años ochenta se inscriben dentro de un período de avance de la democracia a nivel mundial, que se había iniciado en 1974 con la caída de la dictadura en Portugal y que culminaría en 1989 con el inicio de la transición a la democracia en el antiguo bloque soviético. Los países en conflicto de América Central no se mantuvieron al margen de ese avance y en ellos la democratización y el proceso de paz fueron dos tendencias que se reforzaron mutuamente en un círculo virtuoso. Varios factores influyeron en ello. Por un lado la defensa de la democracia era para el gobierno de Reagan un elemento sustancial en la confrontación global con la Unión Soviética y sus aliados. Por otro las medidas democráticas eran para los sandinistas una baza fundamental en el mantenimiento de su prestigio internacional, que actuaba como escudo frente a la intensa presión de Washington. Y en el fondo lo fundamental fue que también en América Central, donde sólo Costa Rica contaba con una genuina tradición democrática, se fue abriendo paso el convencimiento de que la democracia es la fórmula más adecuada para promover la paz y la prosperidad. Revolucionarios leninistas y conservadores ultraderechistas comenzaron a adoptar un lenguaje democrático, lo que contribuyó a que la lucha armada diera paso al enfrentamiento en las urnas. Pero lo más sorprendente fue que los primeros pasos hacia la democracia se dieran en plena guerra civil.

La primera transición democrática se dio en Honduras, donde la acción de los grupos guerrilleros, muy poco numerosos, no había conducido a una guerra civil. En 1980 fue elegida una Asamblea Constituyente y a partir de las elecciones presidenciales de 1982 el poder militar dio paso al poder civil.

En El Salvador la influencia norteamericana contribuyó a que los jefes militares llegaran a considerar la legitimidad democrática como un instrumento útil en el enfrentamiento con la guerrilla, mientras que la derecha optó por la vía electoral como medio para desplazar del poder a la democracia cristiana. Agrupados en la Alianza Republicana Nacional (ARENA) los conservadores obtuvieron un notable éxito en las elecciones a la Asamblea Constituyen-

te de 1982, pero el democristiano Napoleón Duarte se impuso al candidato de ARENA en las presidenciales de 1984. La izquierda seguía sin embargo al margen del juego democrático y la guerra civil continuaba su trágico curso por lo que se estaba todavía lejos de una genuina democracia.

En Guatemala la transición se inició tras el golpe militar que derrocó a dictador Ríos Montt en 1982. Tras ello se impuso el criterio del sector del ejército que era favorable al retorno del poder civil y en 1984 fue elegida una Asamblea Constituyente. Al año siguiente el democristiano Vinicio Cerezo, que no era el candidato favorito de los militares, triunfó en las elecciones presidenciales.

En Nicaragua los sandinistas, formados en el desprecio leninista hacia la "democracia formal", no mostraron un interés inmediato por refrendar su poder mediante unas elecciones. Recurrieron a las urnas sólo en 1984, cuando se enfrentaban a un fuerte acoso de los Estados Unidos, que el año anterior habían demostrado su determinación mediante una intervención militar que derribó al gobierno revolucionario de Grenada. Pareció posible que en las elecciones participara la oposición, agrupada en una Coordinadora Democrática, lo que habría dado plena legitimidad a los eventuales vencedores, pero en el último momento ésta retiró su candidatura. En tales circunstancias ni el holgado triunfo de los sandinistas ni los escaños obtenidos por algunos pequeños partidos, que probaban la existencia de un cierto pluralismo, proporcionaron al régimen nicaragüense el marchamo plenamente democrático que habría hecho políticamente inviable la continuación del apoyo norteamericano a la "Contra". Y frente a la renovada actividad de ésta el régimen se endureció de nuevo.

EL PROCESO DE PAZ

Si las guerras civiles que azotaron América Central a partir de 1978 proporcionaron algunos de los más atroces ejemplos de la capacidad de los hombres para ejercer la violencia contra sus semejantes, el proceso de paz que dio su primer paso importante con la conferencia de Esquipulas de 1986 es una buena muestra de cómo una negociación auspiciada

por la mediación internacional puede poner fin incluso a los conflictos más enquistados.

El rasgo más notable de dicho proceso de paz fue su carácter regional, es decir, el hecho de que fuera impulsado mediante acuerdos entre los cinco gobiernos centroamericanos, que constituyeron el marco general en el que se inscribieron los específicos procesos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Aunque otros gobiernos de fuera de la región y también la ONU jugaron un papel mediador, la pacificación se consiguió a partir de una iniciativa específicamente centroamericana, el proceso de Esquipulas. El Premio Nobel de la Paz concedido en 1987 al presidente costarricense Oscar Arias constituyó un reconocimiento simbólico de este hecho.

Hubo sin embargo una iniciativa de paz anterior, el llamado proceso de Contadora, que fue promovida por los gobiernos de cuatro países latinoamericanos cercanos a América Central: México, Venezuela, Colombia y Panamá. Este proceso tomó su nombre de la reunión que los cuatro celebraron en enero de 1983 en la isla de Contadora (Panamá). Su propósito era promover un acuerdo que garantizara la paz entre los países centroamericanos, en un momento en que las relaciones entre Nicaragua y Honduras eran muy tensas, por la fuerte presencia norteamericana y de la "Contra" en este país.

El grupo de Contadora recibió el respaldo de los Estados miembros de la Comunidad Europea y del llamado grupo de apoyo que en 1985 formaron Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Se trataba de conseguir que todos los países centroamericanos se comprometieran a evitar que su territorio fuera utilizado como base para ataques contra otro y renunciaran a la presencia de bases e instructores extranjeros en su suelo. Se abordaba pues el aspecto exterior del problema, es decir, el enfrentamiento entre el gobierno de Nicaragua y otros gobiernos de la región, sin entrar a debatir los conflictos internos existentes en la misma Nicaragua y en otros países.

El proyecto de acuerdo, enviado a las partes en septiembre de 1984, fue aprobado por el gobierno de Nicaragua, pero tropezó con

las objeciones de los de Costa Rica, El Salvador y Honduras, que mostraron su preocupación por la preponderancia militar que aquélla tenía en la región. Esos mismos gobiernos, que eran los aliados de Washington en la región, rechazaron también un segundo proyecto una año después, mientras que los Estados Unidos hicieron saber que no habría acuerdo si el gobierno de Managua no aceptaba negociar con la "Contra". Desde la perspectiva de Washington, compartida por sus aliados centroamericanos, el defecto de los sucesivos proyectos impulsados por el grupo de Contadora era que habrían conducido a una situación en que la "Contra" se hubiera visto privada de sus bases exteriores sin que el régimen de Managua se viera obligado a hacer concesiones a la oposición. Esta divergencia condujo al agotamiento del proceso. Tras el fracaso de un tercer proyecto, el grupo de Contadora tiró la toalla en 1986.

Fue entonces cuando Esquipulas tomó el relevo. El nuevo proceso arrancó de la reunión que en dicha localidad guatemalteca celebraron los cinco presidentes centroamericanos en mayo de 1986. Sus primeros impulsores fueron dos presidentes recién elegidos, el democristiano Vinicio Cerezo, de Guatemala, convocante de la reunión, y el socialdemócrata Oscar Arias, de Costa Rica, quien poco después presentó el plan de paz que finalmente tendría éxito. El momento era favorable a nuestras iniciativas porque el escándalo "Irán-Contra" (motivado por el suministro ilegal de armamento a la "Contra") había puesto en cuestión en Estados Unidos la política centroamericana de Reagan.

El acuerdo más importante que se tomó en Esquipulas fue el de institucionalizar las reuniones entre los presidentes centroamericanos, creando así un marco permanente de diálogo. En cuanto al plan de paz de Arias, fue primero asumido por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras y sólo después presentado al de Nicaragua, que no participó en su elaboración inicial, pero sí en su discusión, que tuvo lugar en una reunión de los cinco presidentes celebrada en Guatemala en agosto de 1987 (Esquipulas II). A diferencia de los proyectos de Contadora, en esta ocasión la democracia pluralista era

sumida como un componente necesario del proceso de paz, pero el planteamiento general seguía siendo favorable al gobierno de Nicaragua, pues quedaba reconocida su legitimidad. De ahí que los sandinistas, a pesar de la democratización interna que se les exigía, firmaran el plan, mientras que la "Contra" se mostró hostil. El gobierno de Reagan, frenado en su margen de maniobra por un Congreso de mayoría demócrata, no se opuso al acuerdo, pero mostró un cierto escepticismo en cuanto a sus eventuales resultados. Los gobiernos centroamericanos aliados de Washington estaban asumiendo pues una línea de actuación independiente, lo que se explica porque para ellos los objetivos de evitar un conflicto generalizado y deslegitimar internacionalmente a los movimientos insurgentes de sus propios países eran más importantes que el de provocar la caída del régimen sandinista. La democratización interna de Nicaragua, que a diferencia de Contadora exigía Esquipulas, era además una garantía importante de que Managua iba a renunciar a promover la revolución en los países vecinos.

En concreto, el acuerdo de paz centroamericano, firmado el 7 de agosto de 1987, preveía que en los países en conflicto se iniciara un diálogo encaminado a la reconciliación nacional, se apelara a un cese el fuego y se garantizaran las libertades democráticas, que cesara la ayuda exterior a los insurgentes y que se abrieran negociaciones para establecer garantías de seguridad entre los países del área. Una comisión internacional, con participación de la OEA y la ONU, asumió el seguimiento de su puesta en práctica. Veamos ahora cuáles fueron sus resultados en cada uno de los países en conflicto.

a) Nicaragua.

El acuerdo de Esquipulas y el fracaso de su gran ofensiva de aquel año de 1987 dejaron a la "Contra" en una posición muy débil. Por su parte el gobierno sandinista, aunque militarmente victorioso, hacía frente a una situación económica desastrosa y a la continua hostilidad de Washington, por lo que le resultaba muy conveniente llegar a una solución negociada del conflicto. De ahí surgió el acuerdo

provisional de cese el fuego que el gobierno y los insurgentes firmaron en marzo de 1988.

La cuestión fundamental era sin embargo la celebración de unas elecciones con plenas garantías, a lo que el presidente Daniel Ortega se había comprometido en Esquipulas. En ellas esperaba conseguir unas impecables credenciales democráticas que le protegieran frente a Washington, donde un presidente más pragmático, George Bush, había sucedido a Reagan. Fue una segunda oportunidad, después de la que se había perdido en 1984, pero que se dio en un contexto internacional muy distinto, ya que la guerra fría tocaba a su fin al producirse, en los meses finales de 1989, el hundimiento del comunismo en la Europa centro-oriental. Por otra parte, la intervención norteamericana en Panamá (diciembre de 1989) demostró una vez más la voluntad de Washington de utilizar la fuerza siempre que lo considera necesario.

Ante la sorpresa general, en las elecciones presidenciales de febrero de 1990 Violeta Chamorro, candidata de la coalición opositora, se impuso al sandinista Daniel Ortega. Pocos meses después la "Contra" depuso las armas (junio de 1990). Un país devastado por más de diez años de guerra civil emprendió así el difícil camino de la reconciliación nacional y la reconstrucción económica.

b) El Salvador.

A diferencia de la "Contra" nicaragüense y de la guerrilla guatemalteca, el FMLN seguía teniendo en 1989 una importante capacidad ofensiva. Sus aspiraciones no habían tenido sin embargo eco alguno en el acuerdo de Esquipulas, que se había limitado a un genérico llamamiento al cese el fuego entre las partes en conflicto. El objetivo de hacer valer el peso de sus armas para obtener concesiones políticas a cambio de deponerlas, más que el de lograr una muy difícil victoria, fue por tanto el que guió su gran ofensiva de noviembre de 1989, en el curso de la cual sus columnas ocuparon durante varios días ciertos barrios de la capital. En medio de estos combates, efectivos del ejército cometieron una atrocidad que tuvo un gran eco en la opi-

nión pública internacional: el asesinato de seis jesuitas de la Universidad Centro Americana, cinco de ellos españoles, acusados por la extrema derecha de ser intelectualmente proclives a la guerrilla.

Por su parte, el recién elegido presidente Alfredo Cristiani, de ARENA, intensificó los esfuerzos de negociación con el FMLN que había iniciado a finales de 1987 su predecesor Napoleón Duarte. A lo largo de diversos encuentros, que se iniciaron con el celebrado en Ginebra en abril de 1990, gobierno e insurgentes fueron llegando, bajo el constante estímulo del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, a un conjunto de acuerdos que culminaron con la firma de la paz en México, en enero de 1992.

c) Guatemala.

El país más poblado del istmo centroamericano y aquel en que más sangrienta había sido la guerra fue también el último en alcanzar la paz. El primer paso se dio en Madrid, en agosto de 1988, con un encuentro entre la URNG y la recién creada Comisión Nacional de Reconciliación, pero fue sólo en 1994 cuando comenzaron las negociaciones directas entre el gobierno y los insurgentes. La paz se firmó dos años después, en diciembre de 1996.

Una misión de pacificación de la ONU, MINUGUA, actuó en 1997 para verificar el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno guatemalteco y la URNG. Hubo en ella participación española, lo mismo que en las anteriores misiones que la ONU había establecido para verificar el cumplimiento del acuerdo de los cinco gobiernos centroamericanos de cesar toda ayuda a los movimientos insurreccionales de otros países (ONUCA, 1989-1992), y el de los acuerdos entre el gobierno de El Salvador y el FMLN (ONUSAL, 1991-1995). Y la cooperación española sigue estando hoy presente en estos países de América Central, que tras años de conflicto se enfrentan a la ingente tarea de la consolidación de la democracia, la afirmación del Estado de Derecho y el desarrollo económico y social.